



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, primero de marzo de dos mil veintitrés**

#### **19-007**

Proceso:	<b>APELACIÓN</b>
Demandante:	<b>CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-007-2018-00461-01.</b>
Tema:	<b>pensión vejez, compatibilidad.</b>
Decisión:	<b>MODIFICA</b>

Link: [19-007 \(007-2018-00461\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la decisión con la cual el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

En los términos del poder allegado, se reconoce personería tanto a la Dra. Maricel Londoño Ricardo en su condición de representante legal de la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S., apoderada general de Colpensiones según escritura incorporada al plenario, como al apoderado sustituto Dr. DANIEL MATEO ORTIZ GONZÁLEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía Nro. 29.105.874 y 1.037.505.355, y tarjeta profesional Nro. 191.351 y 342.083 expedidas por el C.S. de la J., para que continúen representando los intereses de la entidad.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual mediante **ACTA 6** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

El señor CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA, a través de apoderado judicial, demandó a COLPENSIONES para que reconozca y pague la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición y el Decreto 758 de 1990, con un IBL de \$ 1.093.447 y un monto del 90%, para una mesada de \$984.102, desde el 6 de abril de 2009, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO, EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que desde el 2 de noviembre de 1970 está afiliado a Colpensiones para invalidez, vejez y muerte.
- Que nació el 6 de marzo de 1949, contando con más de 40 años al 1ª abril de 1994, así como más de 1.200 semanas cotizadas, razón por la cual es beneficiario del régimen de transición del sector privado.
- Que pidió la pensión de vejez al ISS, hoy COLPENSIONES, que se la reconoció mediante Resolución 8876 del 19 de mayo de 2010, dejándola en reserva hasta que acreditara su retiro como empleado del Municipio de Medellín.
- Que sucedido su retiro, el 31 de mayo de 2016, solicitó de nuevo la prestación, apoyado en el acto administrativo antes emitido.
- Que a través de Resolución 191624 del 12 de septiembre de 2017, se le negó el derecho por percibir pensión de jubilación por cuenta de la Secretaría de Educación de Medellín desde el 1º de noviembre de 2014.
- Refiere que ambas pensiones son compatibles, pues una es por servicios prestados al Estado y otra por cotizaciones realizadas a Colpensiones.
- Arguye que como fue inducido en error por la entidad, la prestación le debe ser reconocida desde el 6 de abril de 2009 con los correspondientes intereses moratorios.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que eran ciertos los relacionados con el contenido de las resoluciones expedidas por la entidad, la fecha de nacimiento del actor, las semanas cotizadas y que en virtud de ello es beneficiario del régimen de transición. Niega la inducción en error y señala como meros puntos de vista lo relativo a la compatibilidad.

## **1.4. DECISIÓN DEL JUZGADO**

Mediante sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el 10 de diciembre de 2018, se DECLARÓ:

- Que la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encuentra resuelta en sede administrativa a través de la Resolución 008876 de mayo 19 de 2010, acto administrativo en firme y que reconoce lo pedido en este proceso.
- Que la jurisdicción ordinaria laboral no tiene competencia para decidir sobre la validez del acto administrativo en vista de que Colpensiones instauró acción de lesividad el 19 de mayo de 2010 ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual cursa bajo radicado 0500133330352018-00024-300.
- Que Colpensiones ha cumplido con la obligación legal de incluirlo en nómina y pagarle las mesadas pensionales.

En consecuencia, CONDENÓ a la entidad a reconocer y pagar al demandante los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas pensionales causadas a partir del 31 de mayo de 2016, fecha de su retiro del municipio, a la tasa máxima vigente a partir del 22 de marzo de 2017.

Igualmente, condenó en costas a Colpensiones, fijando como agencias en derecho en \$781.242.

Finalmente adicionó la sentencia en el sentido de que la procedencia del pago de los intereses moratorios sólo podría verse afectada por la prosperidad de la declaratoria de nulidad de la resolución que cursa en el Contencioso Administrativo.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DE LA JUEZ AL DECIDIR**

Precisa que la prueba documental aportada, no fue tachada. Tras ello, recalca que la pretensión principal consiste en obtener la pensión de vejez por transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con un monto del 90% sobre el IBL, que es exactamente lo que se reconoció mediante resolución 8876 del 19 de mayo de 2010 proferida por Colpensiones, donde incluso se tasó la mesada inicial en \$984.102. Concluye que el derecho ya ha sido declarado mediante acto administrativo y que ahora se pretende que se declare mediante sentencia (fuentes diversas para el mismo resultado).

Refiere que existe una acción judicial de Colpensiones contra su propio acto administrativo solicitando que se declare la incompatibilidad de las pensiones, pues no podía revocar la resolución 8876 de 2010 sin el consentimiento del actor. Así mismo, que la demanda administrativa se presentó el 22 de junio de 2018 y la de este proceso el 12 de julio del mismo año, no habiéndose formulado una prejudicialidad.

Arguye que el contencioso administrativo tiene la competencia para definir la posible incompatibilidad, por lo que, para evitar decisiones contradictorias, lo procedente era estarse a lo dispuesto en el acto administrativo de 2010, pues la resolución 32322 de 2017 tan solo negó el ingreso a nómina del actor, sin quitarle validez a la resolución 8876 de 2010.

Respecto a la discusión sobre si hay o no compatibilidad, se atiene a lo que sea decidido por la justicia administrativa, aclarando que en esta especialidad de la jurisdicción (laboral) el tema estaba zanjado al considerarse que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluye a los maestros del sistema general, por lo que sus pensiones resultaban compatibles con las derivadas de la Ley 100 de 1993. Aunque, anota, la Ley 811 de 2003 los incluye de nuevo, por lo que el parágrafo transitorio del Acto legislativo 1 de 2005 estableció que serían exceptuados los vinculados antes de esa ley si esos aportes no fueron utilizados para financiar la pensión.

Refiere que los intereses moratorios procederían en caso de que no se declarara la nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión, los cuales correrían desde el 22 de marzo de 2017 sobre el retroactivo causado a partir del retiro del servicio del actor ocurrido el 31 de mayo de 2016.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN DEL DEMANDANTE**

Cuestiona la decisión en cuanto dio por sentado que la pensión ya había sido reconocida por existir una resolución que en 2010 así lo estableció, sin considerar que estábamos frente a un acto administrativo complejo, pues aquel que otorgó la prestación la dejó en suspenso hasta que se diera el retiro y al producirse el mismo en 2016, decidió que no pagaba ni pensión ni indemnización por estar ya pensionado.

En tal sentido considera que realmente NO hubo reconocimiento, viéndose abocado a instaurar esta acción, por lo que el tema de este proceso era la compatibilidad de esas pensiones, cuestionamiento que se hizo el despacho y aceptando que la corte así lo había establecido.

Que a juicio de la juez el derecho debía debatirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual era una contradicción porque todo el tiempo de servicio con el que se pedía la pensión era tiempo privado, 1409 semanas y en últimas, si así lo consideraba, debió declarar la falta de jurisdicción y enviarlo allí.

Finalmente señala, contra lo que dice la juez, que el acto administrativo que reconoce el derecho no existe, fue en últimas una negativa, mirándolo como acto administrativo complejo.

### **2.3. ALEGATOS COLPENSIONES**

Si bien la parte demandante, tras otorgar el término de traslado, mediante correo electrónico oficial del despacho allegó escrito con alegatos el día 3 de marzo de 2022 a las 4:46 p.m., el mismo no se tendrá en cuenta por ser extemporáneo, ya que el término vencía el día 23 de junio de 2020 a las 5:00 p.m. Por esa razón sólo se atenderá lo expresado por COLPENSIONES.

Aclarado lo anterior, tenemos que, a juicio de la apoderada de la entidad, al gozar el actor de pensión de jubilación del Fondo de Prestaciones del Magisterio, la misma resulta incompatible con la reconocida por Colpensiones en 2010, al prohibirse por la Constitución Nacional percibir dos asignaciones provenientes del Tesoro Público.

Agrega que el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 establece que son incompatibles las pensiones e indemnizaciones concedidas por el ISS con cualquiera otra pensión o asignación del sector público.

Explica que las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003 quedaron amparadas por el régimen de prima media consagrado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y que como el actor se vinculó el 1º de enero de 1972, su caso se rige por la Ley 91 de 1989 en lo relativo a su pensión.

Ruega que se revoque la condena al pago de intereses moratorios en razón de que el derecho a la pensión sigue sujeto a un litigio que cursa en los juzgados administrativos donde Colpensiones instauró acción de lesividad.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Se contrae a determinar si al demandante le asiste derecho a la pensión de vejez, analizando la compatibilidad de dicha prestación con la pensión de jubilación otorgada por el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. También deberá considerarse si puede esta jurisdicción ordinaria decidir sin esperar el resultado del proceso instaurado por Colpensiones en el contencioso administrativo para lograr anular la resolución que reconoció la prestación.

De accederse a la pensión, también se examinará lo relativo a los intereses moratorios sobre las mesadas dejadas de pagar.

Así mismo conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencia 40.200 de 2015 con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Dueñas, la Sala analizará en grado jurisdiccional de CONSULTA los temas que no fueron objeto de impugnación por COLPENSIONES con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de la entidad.

#### **4. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar, no es objeto de discusión que el señor CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA se encuentra pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 1º de noviembre de 2014, prestación que le fue otorgada a través de la Resolución 000609 del 1º de febrero de 2010, visible a folios 80/81 del plenario.

Así mismo, está probado que el actor solicitó a Colpensiones la pensión de vejez, la cual le fue reconocida a través de la Resolución 8876 de 2015 (fl 14/15), dejando en reserva su pago hasta tanto acreditara la aceptación de su renuncia al Municipio de Medellín, acto administrativo contra el que se interpusieron recursos de reposición y apelación, en tanto se dejó en reserva, resueltos ambos desfavorablemente y sujetando el pago a la desvinculación del ente territorial.

Posteriormente, el 26 de enero de 2017, mediante resolución GNR 32322 (fls. 96 a 100), Colpensiones negó el ingreso en nómina de pensionados al actor, y agregó que este NO había dado el consentimiento para que la entidad procediera a revocar el acto administrativo que reconoció la prestación. Precisamente fundamentó su postura aduciendo que había constatado que el señor SANTAMARÍA GARCÍA se encontraba pensionado por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, resultando la misma, en su criterio, incompatible con la concedida por Colpensiones.

Para determinar la compatibilidad entre ambas prestaciones es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estipula a quienes no se les aplica el sistema integral de seguridad social contenido en dicha ley y en su segundo inciso indica:

“(…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.” (Subrayado Declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995.)

La intención del legislador, según lo indicó la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de algunos de sus apartes a través de la sentencia C-461 de 1995, fue excluir a los afiliados del Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio del régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, para proteger los derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia pensional. Por ello, no se les aplica en ninguna de sus partes dicha Ley, claro está, en su condición de afiliados a tal fondo.

Empero, cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción tiene una relación laboral o ingresos adicionales, está obligada a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la referida Ley 100, tal y como sucedió en el caso de autos, debido a que confluyeron su condición como docente del sector público y paralelamente como trabajador del sector privado, último de los casos frente al cual en parte alguna de nuestro ordenamiento se prevé la exención de dicha obligación del empleador, ni es considerada como una persona excluida del régimen de prima media con prestación definida. Incluso, ante esas situaciones el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 previó qué hacer en materia de salud, significando ello que la exclusión a que alude el artículo 279 no va en contravía de la afiliación del actor.

No se aprecia entonces que lo aquí pretendido se trate de prestaciones excluyentes, pues la pensión de jubilación no se originó con aportes del sistema general de seguridad social, mientras que la pensión de vejez sí hace parte del régimen general, donde la compatibilidad obedece a una disposición del legislador, por lo cual no hay quebranto a los principios de la seguridad social, como el de sostenibilidad financiera.

Dicha compatibilidad ya ha sido explicada por las Altas Cortes en diferentes providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la 41.001 (del 17 de julio de 2012 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno), la 40.848 (del 6 de diciembre de 2011), la 35.374 (12 de agosto de

2009), la 39.810 (3 de mayo de 2011), entre otras, y recientemente en la 64674 del 4 de julio de 2018, en la que se dijo:

“En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluido del Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, al demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales aquí demandado y a la cual tiene derecho, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional tipo A. de allí que desde el punto de vista fáctico el Tribunal no cometió los errores de hecho endilgados.

Al margen de los anterior, sobre el tema objeto de estudio esta Sala también ha dicho que no existen razones jurídicamente válidas para concluir que la pensión de jubilación oficial que se reconoce a un docente, resulte incompatible con la pensión de vejez que puede obtener el Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados, por lo que son compatibles a instituciones de naturaleza privada.”

Conforme la jurisprudencia reseñada, para la Sala es claro que no existen razones jurídicamente válidas para concluir que la pensión de jubilación oficial que se reconoce a un docente resulte incompatible con la pensión de vejez que pueda obtener el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por servicios prestados a instituciones de naturaleza privada o como trabajador independiente, tornándose acertado señalar que las prestaciones que otorga el Sistema General de Pensiones resultan **compatibles** con la pensión de jubilación que le fue otorgada al actor por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ahora, frente a la pensión de vejez aquí reclamada, debe decirse que, conforme a las pruebas que reposan en el plenario, se encuentra probado que el señor CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA nació el 6 de marzo de 1949, por lo que tenía más de 40 años a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que permite que para el reconocimiento de la pensión de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del Decreto 758 de 1990, que exige como requisitos contar con 60 años, en el caso de los hombres y 1000 semanas en cualquier época o 500 cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.

Así mismo, se encuentra probado que el actor no se vio afectado por la reforma a la Constitución Política introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó la aplicación del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, dado que para el 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del referido Acto Legislativo, había cotizado 1498.17 semanas, superando ampliamente el mínimo de 750 exigido para conservar el beneficio transicional hasta diciembre de 2014, y toda vez que cumplió los 60 años de edad el 6 de marzo de 2009 y para esa fecha acreditaba 1.656.60 semanas cotizadas al sector privado, según se desprende de la historia laboral (véase folios 90-92



del expediente físico o fl. 90 del expediente digital), acreditando así los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, por lo que tiene derecho a que dicha prestación se reconozca a partir de la fecha en que cumplió la edad, pues su última cotización la realizó como independiente para el ciclo de mayo de 2008.

Ahora bien, solicitó la prestación el 6 de abril de 2009 interrumpiendo el termino de que trata el artículo 151 del CPT y la SS y la prestación le fue reconocida a través de la Resolución 8876 del 19 de mayo de 2010, aunque dejando en suspenso su disfrute hasta que demostrara su retiro del servicio.

Por esa razón y por las circunstancias en que se desarrolló posteriormente el trámite pensional entre la entidad demandada y el señor SANTAMARÍA GARCÍA, será en otro acápite donde se decidirá sobre la posible prescripción de las mesadas.

Es menester, en este punto, examinar las razones que llevaron a la a quo a abstenerse de un pronunciamiento de fondo al considerar que la pensión estaba reconocida por Colpensiones y que debería esperarse el resultado del proceso instaurado ante la jurisdicción contencioso administrativa por la entidad, para evitar, entre otras cosas “posibles decisiones contradictorias”. Se estuvo, pues, en lo dispuesto en la Resolución 8876 de 2010 y sólo decidió de fondo lo relativo a los intereses moratorios.

Al respecto, esta Sala considera que, aunque se ataque una resolución (siempre un acto administrativo, dada la naturaleza jurídica de Colpensiones) esta especialidad ostenta jurisdicción para pronunciarse. Diariamente nos ocupamos de estudiar si resultan o no acertadas las decisiones de Colpensiones plasmadas en multiplicidad de resoluciones donde justamente esa entidad se pronuncia de cara a la procedencia de una determinada prestación de las que concede el sistema, precisamente porque de acuerdo al art. 2 del CPT y la S.S. la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, conoce de las *controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos*. Claramente el legislador nos otorgó esa facultad. Cosa diferente sería si se tratase de empleado público, ya que conforme a lo previsto en el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa, conoce entre otros, de los asuntos que versan sobre controversias concernientes a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una entidad de derecho público. Ello no es lo que ocurre en este caso, pues el actor pretende una pensión derivada

enteramente de su labor como trabajador privado, primero dependiente de COLTABACO y en el último tiempo como independiente.

También discrepa esta Sala de la consideración de la Juez de que había un acto administrativo con plena firmeza sobre el que no tenía sentido hacer nuevo pronunciamiento desde la jurisdicción, pues, como bien lo anota el apoderado del actor, la resolución 8876 de 2010, si bien reconoció la prestación, dejó en suspenso su pago hasta que el demandante acreditara su retiro de la entidad territorial. Y cuando este lo informa, Colpensiones profiere otra resolución, la 32322 del 26 de enero de 2017, mediante la cual no accede estudiar el ingreso en nómina del afiliado.

Posteriormente, el demandante solicita la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual también le es negada mediante resolución SUB 191624 del 12 de septiembre de 2017. Allí se arguye que *“...no es posible el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez solicitada teniendo en cuenta que la pensión de jubilación reconocida por la secretaría de educación del municipio de Medellín se causó a partir del 1º de noviembre de 2014 y los aportes realizados a esta entidad son utilizados para la prestación ya reconocida por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín”*.

Como puede observarse, Colpensiones insiste en su negativa y sustenta la misma en la incompatibilidad con la que devenga el actor del ente territorial, nunca en que ya haya un acto administrativo en firme sobre el cual carezca de sentido pronunciarse. Por lo cual, se reitera, el verdadero problema jurídico que se enfrenta es si la pensión solicitada es o no compatible con la que devenga el actor del Fondo de Prestaciones del Magisterio, aspecto sobre el cual esta Sala se declara competente para decidir, con independencia de cualquier otro trámite que se ventile ante la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la cual en este punto se revocará la decisión adoptada en primera instancia.

Y es que cuando el ente demandado inicialmente reconoció la pensión de vejez al actor, pero supeditó su pago a la dejación del cargo público que ostentaba, actuó en derecho. Los servidores públicos deben renunciar al cargo para disfrutar de la pensión por vejez. De vieja data la Corte Suprema de Justicia, en diversas sentencias, entre ellas la de radicación 37959, determinó que en el caso de los servidores públicos que son pensionados por el ISS como administrador del régimen de prima media, para efectos de determinar desde cuándo se reconoce el retroactivo se debe tener presente la Ley 344 de 1996, diseñada para la racionalización del gasto público, que en el artículo 19 indica: *“Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso...”*,

disposición concebida como un instrumento para evitar la posibilidad de la simultánea percepción de asignación salarial y pensional por parte de los servidores públicos con derecho a pensión. De esa manera, si se opta por continuar con la vinculación laboral, el fondo de pensiones respectivo no resultará afectado con el egreso de la mesada y contará con la posibilidad de destinar tales recursos a otras funciones del sistema; y si el servidor selecciona la opción pensional, se liberará un destino o cargo público que permitirá el acceso al mismo de otra persona que pueda y requiera ingresar o mantenerse en la vida laboral activa, todo lo cual se adecua al objetivo racionalizador de la ley y a uno de los fines esenciales del Estado como es el de garantizar el acceso de la población al mercado laboral, con el disfrute de los servicios que esta prestación conlleva.

Esta norma fue sometida a control de constitucionalidad profiriéndose en consecuencia la sentencia C-584 de 1997 que la declaró exequible sin condicionamiento alguno. Se fundamentó esta declaratoria en que la obligación de renunciar al cargo público como requisito para gozar del derecho a la pensión de vejez es constitucionalmente admisible porque se trata de una medida idónea y proporcional que persigue una finalidad legítima, útil y necesaria con consecuencias positivas de mayor entidad que los resultados restrictivos que procura.

Desde esta óptica, si el demandante prestó sus servicios para el municipio de Medellín hasta el 31 de mayo de 2016, día en que se aceptó su renuncia, sólo a partir de allí podría disfrutar de la prestación por vejez.

Punto que sin duda resulta relevante, pues es la fecha a considerar para evaluar si alguna mesada ha prescrito.

Al efecto tenemos que el actor, según consta en la Resolución 32322 de 2017, reclamó su pensión de vejez a Colpensiones el 28 de diciembre de 2016 y radicó su demanda el 12 de julio de 2018, por lo que ninguna mesada se ha extinguido como derecho por no haber transcurrido el término trienal consagrado por la ley desde la exigibilidad acaecida el 1º de junio de 2016.

Ahora bien, la pensión fue liquidada por Colpensiones desde el 19 de mayo de 2010, sobre un ingreso base de liquidación de \$1.093.447 al que se aplicó un monto del 90%, pues tenía el actor 1.401 semanas cotizadas, causándose con 14 mesadas, a la luz de lo dispuesto en el Acto legislativo 01 de 2005, pues se trataba de una pensión inferior a tres salarios mínimos legales anterior al 31 de julio de 2011.

Esta Sala ha llevado ese valor a junio 1º de 2016, cuando ya el demandante estaba desvinculado del servicio público, según la siguiente tabla, para encontrar lo adeudado al día de esta sentencia, que

asciende a un total de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (\$131.420.516)

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2010	3,17%		\$984.102	
2011	3,73%		\$1.015.298	
2012	2,44%		\$1.053.169	
2013	1,94%		\$1.078.866	
2014	3,66%		\$1.099.796	
2015	6,77%		\$1.140.048	
2016	5,75%	8	\$1.217.230	\$9.737.838
2017	4,09%	14	\$1.287.220	\$18.021.087
2018	3,18%	14	\$1.339.868	\$18.758.149
2019	3,80%	14	\$1.382.476	\$19.354.659
2020	1,61%	14	\$1.435.010	\$20.090.136
2021	5,62%	14	\$1.458.113	\$20.413.587
2022	13,12%	14	\$1.540.059	\$21.560.830
2023		2	\$1.742.115	\$3.484.230
TOTAL				\$131.420.516

Se autorizará a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional que pague en cumplimiento de esta sentencia, el porcentaje destinado a los **aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud**, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema. Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 54480 y 46234.

Finalmente respecto a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

En el caso de la pensión de vejez, éstos se causan cuatro meses después de la presentación de la solicitud, toda vez que es el tiempo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho.

Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, tenemos que el señor CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA, una vez desvinculado del servicio público, solicitó la pensión de vejez el **28 de diciembre de 2016**, oportunidad en la que COLPENSIONES le negó la pensión indicándole que esta prestación era incompatible con la devengada del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, argumento que no resulta válido, pues, como se analizó, ya la jurisprudencia de tiempo atrás tiene definido la compatibilidad de ambas prestaciones, por lo que la negativa de la entidad no estuvo justificada y por tanto hay lugar el reconocimiento de los intereses moratorios pasados cuatro meses de la solicitud es decir, a partir del **28 de abril de 2017** y hasta la fecha de pago.

En consecuencia, la sentencia apelada será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** en tanto DECLARÓ el derecho, pero ordenándose el reconocimiento del retroactivo adeudado por concepto de pensión de vejez, prestación que a partir del 1 de marzo de 2023 deberá continuar pagando en cuantía de \$1.742.115, con los incrementos anuales de ley y teniendo en cuenta 14 mesadas por año.

También deberá pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo adeudado hasta la fecha efectiva del pago, modificándose en este aspecto la fecha a partir de la cual procede su cuantificación.

Sin costas en esta instancia.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA** identificado con la cédula de ciudadanía 8.299.809 contra **COLPENSIONES**, en tanto declaró la existencia del derecho a la pensión de vejez con sujeción al acto administrativo a través del cual la entidad reconoció NO sólo la condición de

beneficiario del régimen de transición del actor, sino además que dicha prestación debía otorgarse conforme los lineamientos previstos en el Decreto 758 de 1990.

**SEGUNDO:** se **REVOCA** los numerales segundo, tercero y séptimo del fallo y en su lugar se **ORDENA** a Colpensiones reconocer y pagar al demandante, a título de retroactivo de la pensión de vejez, la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (\$131.420.516) correspondiente a las mesadas causadas entre el 1 de junio de 2016 y el 28 de febrero de 2023. A partir del 1 de marzo de esta anualidad, la entidad continuará pagando la prestación en cuantía de \$1.742.115, con los incrementos anuales de ley y teniendo en cuenta 14 mesadas por año. Se **AUTORIZA** a **COLPENSIONES** que del retroactivo que pague en cumplimiento de esta sentencia, descuenta el porcentaje correspondiente a los aportes en salud.

**TERCERO:** se **MODIFICA** el numeral cuarto del fallo en cuanto a la fecha de causación de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuya liquidación corresponderá efectuarla a Colpensiones sobre el retroactivo adeudado, los cuales se tasarán desde el 28 de abril de 2017 hasta la fecha efectiva del pago, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ordinario laboral. <b>APELACIÓN</b>
Demandante:	<b>CARLOS ALBERTO SANTAMARÍA GARCÍA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-007-2018-00461-01.</b>
Decisión:	<b>MODIFICA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>01/03/2023</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 02/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario